

En la sesión extraordinaria efectuada el veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se da respuesta a la consulta realizada por el Tesorero Municipal del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, relativa a la ejecución de obras y programas sociales durante el proceso electoral.

ANTECEDENTES:

Acuerdo sobre ajustes de plazos del proceso electoral

I. Mediante acuerdo número CGIEEG/045/2017, aprobado en la sesión extraordinaria del dos de septiembre de dos mil diecisiete y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 154, segunda parte, del trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ajustó diversos plazos y modificó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018 a celebrarse en el estado de Guanajuato, en cumplimiento a la resolución INE/CG386/2017 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como para establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.

Conforme a dicho acuerdo, los periodos de campaña para los cargos correspondientes a gubernatura, integrantes de ayuntamientos y diputados locales, son los siguientes:

Tipo de elección	Fecha de inicio	Fecha de término
Gubernatura	30 de marzo de 2018	27 de junio de 2018
Ayuntamientos	29 de abril de 2018	27 de junio de 2018
Diputaciones de mayoría relativa	14 de mayo de 2018	27 de junio de 2018
Diputaciones de representación proporcional	14 de mayo de 2018	27 de junio de 2018

Consulta

II. El doce de abril de dos mil dieciocho, se presentó ante este Instituto Electoral el oficio número TES/037/0401/2018, suscrito por el Tesorero Municipal del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, a través del cual formula una consulta respecto a la ejecución de obras y programas sociales durante el proceso electoral.

CONSIDERANDO:

Fundamento constitucional para la organización de elecciones

1. De conformidad con el artículo 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realizará a través del organismo público electoral local y por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley.

Personalidad y principios que rigen al IEEG

2. El artículo 77, párrafos primero y segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, se estipula que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Órgano de dirección del IEEG

3. El artículo 81 de la ley comicial local señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Facultades del Consejo General para responder consultas

4. De conformidad con el artículo 92, fracción XXVI de la ley electoral local, es atribución del Consejo General desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de la propia ley.

Respuesta a la consulta planteada

5. En el oficio referido en el antecedente II de este acuerdo, se plantea lo siguiente, en su parte sustancial:

[...]

De acuerdo, al Programa de Gobierno que cuenta esta Administración 2015-2018 y con la posibilidad de cumplirlo al 100% al término de este trienio en el presente año, le comento si dentro del periodo de veda electoral, podemos realizar el proceso de contratación y ejecución de la cartera de obras y programas sociales del ejercicio fiscal 2018, por lo cual le solicito su apoyo para de dilucidar, si estamos incurriendo en alguna infracción de acuerdo con la normativa vigente.

[...]"

Este Consejo General, con la finalidad de dotar de certeza al proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, procede a dar respuesta a la consulta formulada por el Tesorero Municipal del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, la cual versa sobre si es posible llevar a cabo la ejecución de obras públicas y programas sociales durante el periodo electoral, concretamente en el lapso correspondiente a las campañas electorales y hasta la jornada electoral.

Al respecto, debe señalarse que ninguna disposición jurídica prohíbe la ejecución de obras públicas o programas sociales durante el periodo comprendido a partir del inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, puesto que se trata de acciones tendientes a la satisfacción y atención de necesidades sociales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante resolución SUP-JRC-273/2010, ha establecido que la función pública no puede paralizarse por ser primordial en el desarrollo de un país, además de que no debe verse alterada la posibilidad de una mejor realización de las tareas que confía la Constitución y la ley a los servidores públicos en beneficio de la sociedad, sólo que debe cuidarse o tenerse presente, que con ese actuar no se contravengan disposiciones de orden público, ya que la esencia de la prohibición constitucional y legal, radica en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los funcionarios aprovechen la posición en que se encuentran para que de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero, que

pueda afectar la contienda electoral, porque ello sería un atentado directo a los principios y valores que rigen los procesos electorales.

Asimismo, en resolución SUP-RAP-109/2009, la propia Sala Superior ha señalado que las disposiciones que restringen la propaganda electoral durante el tiempo que comprenden las campañas y hasta la conclusión de la jornada comicial, no tiene por objeto impedir que los funcionarios públicos dejen de llevar a cabo los actos que por su propia naturaleza deben efectuar como servidores públicos en los tres niveles de gobierno y menos aún prohibir que participen activamente en la entrega de bienes y servicios a los gobernados en la demarcación territorial que corresponda, ya que ello podría atentar contra el desarrollo y correcto desenvolvimiento de la función pública que están obligados a cumplir en beneficio de la población.

En este sentido, se cita el siguiente criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA).

Los artículos 39, 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, entre otras cuestiones, los principios que rigen las elecciones de los poderes públicos, como son: el voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones por un organismo público autónomo; la certeza, imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social; el financiamiento de las campañas electorales y el control de la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones electorales. El principio de legalidad, de observancia estricta en materia electoral, tiene como uno de los principales destinatarios del estado constitucional de Derecho, al propio Estado, sus órganos, representantes y gobernantes, obligándoles a sujetar su actuación, en todo momento, al principio de juridicidad. De igual forma, los principios constitucionales aludidos tutelan los valores fundamentales de elecciones libres y auténticas que implican la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión; el poder público no debe emplearse para influir al elector, tal y como lo han determinado otros tribunales constitucionales, como la Corte Constitucional alemana en el caso identificado como 2 BvE 1/76, al sostener que no se permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales, en especial, propaganda; de igual forma se protege la imparcialidad, la igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad, en busca de inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o que distorsione las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social, alterando la igualdad de oportunidades entre los

contendientes. En concordancia con lo anterior, el artículo 59, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Colima, establece como causa de nulidad de una elección, la intervención del Gobernador, por sí o por medio de otras autoridades en los comicios, cuando ello sea determinante para el resultado de la elección. Lo que implica la prohibición al jefe del ejecutivo local de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de otras autoridades o agentes. Así, la actuación del ejecutivo local en los procesos electorales está delimitada por el orden jurídico y siempre es de carácter auxiliar y complementario, en apoyo a las autoridades electorales, siendo que cualquier actuación que vaya más allá de los mencionados límites, implicaría la conculcación del principio de neutralidad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige a todos los servidores públicos para que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad aplicable.¹

Así, lo que está prohibido, en términos del artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Por lo que hace a la operación de programas sociales, a través del acuerdo CGIEEG/106/2018 aprobado en fecha 29 de marzo del año en curso, este Consejo General estableció las restricciones que deben seguirse con motivo del proceso electoral en curso, entre las que destaca la consistente a que los beneficios de dichos programas no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda.

Lo expuesto, tal como establece el siguiente criterio:

PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, Base III,

¹Tesis V/2016. Quinta Época: Juicio de revisión constitucional electoral y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JRC-678/2015 y acumulado.—Actores: Partido Acción Nacional y otro.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Colima.—22 de octubre de 2015.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Fernando Ramírez Barrios y Carmelo Maldonado Hernández. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 108, 109 y 110.

Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, en principio, no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.²

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, es inconcuso que sí podrán ejecutarse obras públicas y programas sociales durante el periodo de campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, pero no podrá llevarse a cabo su difusión a través de cualquier medio de comunicación social, aunado a que los beneficios de los programas sociales no podrán entregarse en eventos masivos.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 77, párrafos primero y segundo, 81 y 82, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. En los términos precisados en el considerando 5, se da respuesta al escrito signado por el Tesorero Municipal del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.

SEGUNDO. Con copia de este acuerdo notifíquese al Tesorero Municipal del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, en su domicilio oficial.

Notifíquese por estrados.

²Tesis LXXXVIII/2016. Quinta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-384/2016.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala.—2 de noviembre de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Mauricio I. del Toro Huerta y Jorge Alberto Medellín Pino. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 65 y 66.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Secretaria Ejecutiva del mismo.